





05 02 2018

No hay comida en Pdval y Mercal de La Gran Valencia, solo desolación

La política del Gobierno nacional que comprende la regulación, formulación, mercadeo y distribución de alimentos, ha sido desmontada por la red de corrupción que se ha tejido en torno a la llamada Misión Alimentación, programa social que estuvo destinado a ofrecer comida precios subsidiados a la población más vulnerable.

En el estado Carabobo, más de un millón de personas que habitan en los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos, no cuentan con un adecuado abastecimiento en la red Pdval y Mercal. La única manera de conseguir productos de la cesta básica es a través de los establecimientos privados como los supermercados. Las largas filas en la cadena de locales establecidos por el Gobierno en esa región no existen, porque sencillamente no hay qué comprar.

En plena avenida Henry Ford - como aún la llama el común- de Las Agüitas, municipio Los Guayos, está un monumento a la indiferencia: un Mercal abandonado. A simple vista se observan ventanas rotas y un portón a medio caer. "Lo saquearon", fue la respuesta de un morador al consultarle porque no se estaba abierto al público.

"¡Un fiasco!". Con estas secas palabras, una ciudadana define la ejecución de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) en la Gran Valencia y mun donde los denominado

la Gran Valencia y municipios vecinos, donde los denominados Mercal, Pdval y Abastos Venezuela están cerrados.







En la Vivienda Popular Los Guayos, a pocos kilómetros, se encuentra otro establecimiento. Al momento estaba abierto. Había unas 15 personas en la fila para entrar y se ofrecía en venta papel aluminio, salsa picante y sopa instantáneas. El panorama es desolador: muchos estantes y neveras vacías, las lámparas que alguna

vez estuvieron suspendidas del techo fueron suplantadas por cables colgantes con bombillos fluorescentes. Además de los retratos de Chávez, Fidel y Maduro, destaca un papel pegado en la pared con el escrito: "Tenemos que declararle la guerra a la corrupción desde nuestro hogares".



Sentada en el banco de espera, una mujer llamada Marlene relató que vive en Las Agüitas. Se trasladó hasta ese local con la esperanza de encontrar algo de comida. Se quedó en la fila por una sola razón: con el sobre de sopa resuelvo la cena de mi familia.



"Aquí es por número de cédula...cuando llega comida. Ahorita que no hay nada, se deja la entrada libre",

Acotó un cajero, poco antes de informar a los presentes, que debido a un inconveniente con la empresa que traslada la remesa. No se aceptaba efectivo para cancelar la factura de Bs. 11.100 por el combo de dos salsas picantes, dos rollos de papel aluminio y tres sobres de sopa.

Peor es el panorama para los habitantes de Guacara. En la comunidad de Tricentenario, sector Aragüita. El Mercal, uno de los más antiguos de la región, no despacha.

Casi en la misma situación está el recinto Tipo I de Primero de Mayo.



"Solo hay salsa picante", alcanzó a decir el vigilante en la entrada, para prevenir a los esperanzados compradores. "Hace tiempo que no nos despachan nada, ya será para el próximo año", concluyó el hombre uniformado con franela roja.







PDVAL PARA EL RECUERDO



El 6 de enero de 2008, el Presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) con el objetivo de garantizar el abastecimiento de comida, esta vez no con precios subsidiados, como en Mercal, sino al valor real.

A finales de abril de 2015, el presidente Maduro, en visita a Valencia inauguró, junto al ex ministro Carlos Osorio y el entonces gobernador, Francisco Ameliach, el "Súper Pdval del Sur", en las advacencias de la Plaza de Toros Monumental.

Ese mercado tipo II, en el que se invirtieron Bs. 15 millones para su construcción y Bs. 40 millones en dotación, está cerrado. Incluso, el seguimiento que Transparencia Venezuela le ha hecho a este caso, luego de las denuncias de vecinos, arroja que solo prestó servicio por un año y tres meses.

"Allí solo lo abren como depósito y de vez en cuando para las entregas programadas de

combos para las Ubch (Unidades de Batalla Bolívar – Chávez) y los Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción), aseguró un señor encargado de un comercio cercano.

Según nota de prensa de la Gobernación de Carabobo, este abasto tiene una capacidad de albergar 75 toneladas de alimentos para beneficiar a más de 20 mil familias carabobeñas semanalmente, en especial a los habitantes de las parroquias ubicadas al sur de Valencia.

Además de ello, las instalaciones cuentan con dos niveles distribuidos en área de almacenamiento de mercancía seca, almacenamiento en frío, área de despacho, servicio, zona de espera, plataforma de carga y descarga, comedor, área de servicio para el personal y estacionamiento.

En la página web de Pdval se especifica que hay 10 puntos de venta en Carabobo, de los cuales tres están dentro de empresas





propiedad del Estado (Rialca, Industrias Diana y Refinería El Palito), pero a estos no tuvo acceso Transparencia Venezuela. Otros establecimientos se encuentran en el Círculo Militar, en el municipio Montalbán, en Ciudad Chávez y en Flor Amarillo.

Una de las premisas por el cual fue creado Pdval fue para "lograr una disponibilidad continua de los productos de la cesta básica". Disponibilidad permanente que no se ha concretado en el Pdval Hiper Mi viejo Mercado, ubicado en el centro de Valencia y Unicentro Guacara.

En un local en el casco central, al momento de la visita, se trabajaba medio día. Vendían cilantro y ají en polvo a Bs. 3 mil el frasco. El punto de venta estaba caído, solo se podía comprar en efectivo.

"Lástima que se acabó ese atún que vendieron hace como tres semanas, salió bien bueno, más nunca volvieron a traer", exclamó una señora que salió frustrada al corroborar que no había mercancía en el sitio.

Por otra parte, en Unicentro Guacara, nada más queda una valla para recordar que alguna vez existió un Hiper Pdval. En el centro comercial se informó que no suben la Santamaría del abasto desde hace dos años.

DISPUTA ROJA POR LA COMIDA

Tampoco la red de distribución casa por casa funciona bien en Carabobo y las acusaciones entre oficialistas no se han hecho esperar.

El gobernador Rafael Lacava insinuó un presunto acaparamiento de comida por parte de la gestión de su antecesor y compañero de partido Francisco Ameliach. Sin embargo, no formalizó la denuncia para responsabilizar a los culpables del supuesto delito.

El 1 de noviembre de 2017 hubo cambios en la dirección ejecutiva de la empresa privada "Alimentos Carabobo (Alimca)", cuyo presidente, Miguel Flores, fue sustituido por Anderson Ro-

Francisco Ameliach

dríguez. Alimca es la empresa encargada de almacenar, empaquetar y distribuir los alimentos destinados a las bolsas CLAP, cuya sede se encuentra localizada en Guacara.

Rafael Lacava







Este cambio de dirección causó revuelo a través de la red social Twitter, luego que el gobernador recién electo, Rafael Lacava, posteara en su cuenta: "comida almacenada que debe salir ya para la calle antes de que se eche a perder. A moverse".

La respuesta no tardó. El diputado constituyentista y ex mandatario regional, Francisco Ameliach, denunció un "atropello a los funcionarios de la sala situacional del Psuv", cuyas oficinas se encuentran dentro de Alimca. Igualmente, reaccionó contra las acciones de Policarabobo y el Secretario de Gobierno, Jesús Santander. Varias toneladas de alimentos se encontraban depositadas en este almacén y se presumía que su propiedad estaba adscrita a Ameliach, hipótesis desmentida por el ex gobernador a través de su post en twitter, donde señaló: "Desmiento categóricamente que el Psuv o mi persona tenga galpones donde se acapare alimentos y medicinas. Eso es totalmente falso".

LA CORRUPCIÓN VIOLA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

El derecho a la alimentación presenta dos componentes: **accesibilidad** y **disponibilidad**. Entendiendo el primero como la garantía en el acceso económico y físico de los alimentos y el segundo, es la disponibilidad de los alimentos para su venta en mercados y comercios, según lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos². Con base a esta consideración, el gobierno no cumple con el derecho a la alimentación y, mucho menos, con la seguridad y soberanía alimentaria. Este escenario responde a muchos factores:

- Políticas públicas sin diseño adecuado
- Improvisación de medidas
- Rotación en la cartera ministerial
- Corrupción,

entre otros aspectos.

En lo pertinente a la corrupción, las prácticas corruptas han socavado los recursos naturales y económicos que generaron la restricción de alimentos. El desvío de dinero del gasto social, ha obstaculizado la efectividad del derecho a la alimentación. La opacidad en la rendición de cuentas de los contratos en los procesos de compra, venta, almacenamiento y distribución, prueba de ello, fueron las más de 160 mil toneladas de alimentos descompuestas en los contenedores Pdval en 2010.



2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf

Tu app para denuncias





NoMasGuiso

#ObservatorioMisiones

transparencia.org.ve









